

Hay momentos históricos en los cuales irrumpe una potencialidad desbordada que se fue gestando y madurando. Uno de esos momentos apareció mundialmente en 1968. Por ejemplo, en Francia se dio una alianza entre estudiantes y sindicatos, y en Checoslovaquia se presentó un esperanzador intento democratizador. El movimiento mundial del 68 abrió cambios profundos planetarios e implicó una esperanza colectiva. En México convergieron estudiantes de varios centros de enseñanza superior. El movimiento estudiantil mexicano del 68 tenía tras de sí recientemente el movimiento por la democracia sindical del 58, y el movimiento médico de mediados de los sesenta. Los movimientos previos que buscaban democratizaciones fueron duramente reprimidos y uno de los saldos era medio centenar de presos políticos a los que les aplicaron el llamado delito de disolución social. Las primeras demandas del movimiento del 68 era la libertad de los presos políticos, la derogación del delito de disolución social, la desaparición de uno de los cuerpos represivos (el de los granaderos), la destitución de jefes policiacos; y ante los ataques de las fuerzas armadas contra manifestaciones estudiantiles, se exigían la investigación de los hechos, diálogo, y la defensa de la autonomía universitaria. La respuesta de un gobierno autoritario fue la infiltración del movimiento para incitar provocaciones, la utilización de grupos de choque, el control mediático que difamó al movimiento, y una matanza de estudiantes cuya cifra no se ha podido establecer. Últimamente se han ido documentado algunas cifras de muertos, heridos, detenidos y desaparecidos. No obstante, un diario inglés habló de más de 250 muertos y mil 200 heridos. Pero integrantes del Comité pro Libertades Democráticas aseguran que el número de muertos es mayor que el que se pueda documentar, porque los funcionarios alteraron las actas.<sup>1</sup> Quien fuera fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado declaró que cuando era presidente Fox, él y su secretario de defensa entorpecieron la fiscalía. El historiador Lorenzo Meyer habla del poder criminal de la Presidencia. La intelectualidad de la época se dividió. Mientras Octavio Paz en protesta renunció a la embajada en la India, Salvador Novo, Elena Garra y Martín Luis Guzmán condenaron el movimiento y justificaron la represión. Agustín Yáñez, funcionario del gobierno se alineó con quienes le pagaban. Se multiplicó el número de presos políticos. Inició la escalada de la llamada guerra sucia contra las expresiones de protesta de los de abajo. Se trató no sólo de un crimen de Estado, sino de lesa humanidad y de genocidio, cuyos autores intelectuales y materiales han gozado de total impunidad. Las manos ensangrentadas del ejército contra el pueblo han sido una constante. Si hay una memoria colectiva renovada y que no se olvida es el movimiento estudiantil del 68. Como en muchos otros movimientos, el papel de las mujeres en los eventos del 68 ha quedado invisibilizado. Pero investigadoras han mostrado como la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas dieron una constante lucha por la liberación de los presos políticos, el cese a la represión y el cumplimiento del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga. Después de la masacre del 2 de octubre, este organismo exigió la liberación de las estudiantes presas. Las investigadoras han destacado que las mujeres del 68 interpelaron el orden social, jurídico y político heteronormativo de la

---

<sup>1</sup> Homero Campa, "El número de muertos del 68, aún en el misterio" *Proceso*, 30 de septiembre de 2018, [https://hemeroteca.proceso.com.mx/?page\\_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=420288](https://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=420288)

sociedad. Hay organizaciones sociales que exigen al Estado mexicano que reconozca las grandes violaciones a los derechos humanos contra el movimiento estudiantil de entonces y de varios momentos. En el contexto de una elección masiva que exige cambios de fondo, el secretario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconoció que lo del 68 había sido un crimen de Estado. Se ha destacado el alto precio que los movimientos y el pueblo de México han tenido que pagar para ir cavando la tumba de un sistema autoritario. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el movimiento del 68 se encuentran íntimamente unidos desde abajo y en el reclamo a los de arriba.

Cuando parecía que se haría una recapitulación y evaluación de la importancia e influencia del movimiento del 68 cincuenta años después, un movimiento que implicó transformaciones políticas y culturales de gran calado, apareció un nuevo movimiento estudiantil mexicano. La semilla fue en un plantel de un CCH. Independientemente de controles y manipulaciones acostumbradas en las estructuras universitarias, ante una manifestación estudiantil de ese plantel frente a rectoría se dio un ataque solapado por autoridades contra los quejosos por medio de una desmedida violencia ejercida por los llamados porros. Los grupos de vigilancia de la universidad fueron parte o cómplices de esta agresión. Se ha especulado si esto fue planeado por parte de los grupos que temen que disminuya su control por efectos del triunfo electoral del López Obrador. Pero más allá de las intenciones de los provocadores, se develó una situación terrible que padecen los estudiantes actualmente: una violencia múltiple.

Aunque el terror se ha profundizado y extendido, los universitarios remontaron el miedo y organizaron una concentración de 30 mil asistentes en la explanada de rectoría en donde se exigió la erradicación de los grupos porriles. Posteriormente, en concurrida asamblea interuniversitaria se decidió realizar una marcha el 13 de septiembre al Zócalo para recordar la marcha del silencio cinco décadas antes. La democratización se manifestó de inmediato pues los delegados tendrían que consultar a sus respectivas asambleas para integrar un pliego petitorio general. Un punto central fue luchar por una auténtica educación pública y gratuita para todos y contra la privatización de la educación, acabar con la precariedad laboral de los académicos, contra la violencia imperante, contra la violencia de género y el acoso, contra el porrismo, por la eliminación del narcotráfico en las instalaciones universitarias, por la democratización de la toma de decisiones en las universidades, por la modificación democrática de los planes de estudio, y a favor de la transparencia y rendición de cuentas. Otro elemento fundamental fue que también expresaron la solidaridad con movimientos sociales (con el movimiento de Atenco, con el sindicato jornalero de San Quintín, con la CNTE), y optaron por coordinar acciones con el Comité 68 y las madres y padres de estudiantes de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Denunciaron la violencia que han desatado los gobiernos neoliberales, la cual ha abrumado a la juventud con asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones, feminicidios y el narcotráfico. Criticaron que se hubiera pretendido normalizar esta situación. Un reclamo central fue el esclarecimiento del ataque porril del 3 de septiembre de 2018. Se exigió la investigación del financiamiento, origen, funcionamiento y acciones de los grupos porriles. Los universitarios demandaron aumento del presupuesto de educación e incremento de la matrícula universitaria. Una exigencia generalizada ha sido que se tiene que garantizar la seguridad de los estudiantes tanto dentro de los planteles como en sus intermediaciones.

A siete días del ataque, el rector se reunió con el presidente electo donde se reconoció que el movimiento estudiantil era legítimo y que no había más camino que el diálogo. Se aceptó que los estudiantes exigían justicia y se confió en que no se dejarían manipular por ningún grupo que quisiera aprovechar el movimiento para sus propios intereses. El rector también acudió al CCH de Azcapotzalco, y aceptó los nueve puntos del documento, entre los que estaba la correcta asignación de docentes y dar solución a los problemas de acoso y de seguridad contra los miembros de la comunidad universitaria. Se comprometió el rector a desarticular, destituir y expulsar a los grupos porriles y personas que los subsidiaban.

Padres de los normalistas de Ayotzinapa acudieron a la UNAM para apoyar el movimiento estudiantil. Indicaron que la agresión contra los 43 guardaba muchas similitudes con los ataques de grupos porriles contra la UNAM. Destacaron que era irritante que siguieran golpeando a jóvenes, y señalaron que los porros eran mangoneados por el mismo sistema.

Un grupo de maestros universitarios denunciaron sus precarias condiciones salariales, y anunciaron que se sumarían a las manifestaciones de protesta de los alumnos. Otro conjunto de docentes planteó “Denunciar la violencia es nuestro deber. Así como defender nuestra universidad. Lo urgente es que se esclarezcan los hechos (...). Que haya justicia (...) que ya no haya porros, pero tampoco más feminicidios, agresiones ni amenazas a estudiantes (...). No dejar que grupúsculos con intereses ajenos a nuestra institución secuestren nuestras voces y de apoderen de nuestras asambleas (...). Los temas que apremia abordar son varios. Erradicación de los grupos de choque, castigo a la impunidad y al acoso, implementación de protocolos de género, fomento de la cultura de la prevención (...). La universidad debe ser la base de una sociedad más justa”.<sup>2</sup>

Más de 20 mil universitarios replicaron la marcha del silencio, con mantas que decían: “Nuestro silencio pide justicia a gritos”. El silencio se rompió cuando el contingente llegó al antimonumento donde fueron nombrados los 43 y se exigió justicia. En las mantas se leía: “Queda claro que los porros son del Estado”, “Somos los nietos del 68, los hijos del 99 y hermanos de los 43”, “50 años después México todavía tiene estudiantes y periodistas muertos”; “Quiero estudiar y no morir en el intento”, “La educación sin sangre entra” “Memoria, lucha y conciencia, historia en resistencia”. Se redobló la exigencia de que se pusiera fin a los grupos porriles, y a los feminicidios. Se recordó que una manta de la marcha del silencio del 68 decía: “Democracia directa y concreta ya”. Un militante del 68 apuntó que la lucha del 2018 resultaba más contundente porque conjuntaba la contención de la violencia, el combate a la pobreza y la desigualdad, la reconstrucción del estado de derecho y una nueva posición frente al mundo. Al terminar la marcha hablaron integrantes del 68, padres de estudiantes que han sido víctimas de la violencia, padres de los normalistas de Ayotzinapa, damnificados de los sismos de 2017 y opositores al nuevo aeropuerto en Texcoco. Ante la petición de la renuncia del rector se dijo que no era una exigencia central y de todos, pues el problema era estructural, y no se remediaba con el cambio de un funcionario. El Comité del 68 anunció que buscaría llevar ante tribunales al expresidente Echeverría y a funcionarios involucrados en la matanza del 2 de octubre. Se destacó que a 50 años no había

---

<sup>2</sup> Moisés Garduño, “La autonomía universitaria frente a la inseguridad nacional: retos y debates en la UNAM”, *Rebelión*, 12 de septiembre de 2018, <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246313&titular=la-autonom%EDa-universitaria-frente-a-la-inseguridad-nacional:-retos-y-debates-en-la-unam->

ni un funcionario o militar que hubiera sido sentenciado, y que era necesario acabar con esa impunidad, así como la impunidad de la masacre del 10 de junio del 71 y de la guerra sucia.

La UNAM anunció la creación de dos mesas de atención sobre asuntos de seguridad y de género para recabar opiniones, aunque maestros y estudiantes señalaron que esa respuesta no era la adecuada, pues se debía abrir cauce a una participación amplia y verdadera.

Alumnos participantes en la asamblea recibieron amenazas de ser golpeados o asesinados por estar en el movimiento contra los porros. Algunos representantes habían sido impuestos por grupos porriles y autoridades, como las de Contaduría. En la asamblea de Química las autoridades también infiltraron la reunión. En otras escuelas hubo intentos de autoridades para romper las asambleas. Al iniciar la sesión de la asamblea interuniversitaria el 14 de septiembre, como se comprobó que los representantes de Contaduría y Administración habían sido impuestos por la dirección, fueron expulsados de la asamblea. Los acuerdos se tomaron hasta el día siguiente. Pero los representantes los debían llevar ante sus asambleas para poder llegar con su opinión en la asamblea de 29 de septiembre cuando se haría la aprobación final del pliego de peticiones. Hubo 200 delegados de 600 asambleas locales. Por votación se decidió exigir castigo a los responsables y ejecutores de los ataques a los estudiantes del CCH Azcapotzalco el 3 de septiembre; crear un modelo para elegir autoridades universitarias; la implementación democrática de los planes de estudio; exigir el aumento de la matrícula; la desaparición de cuotas; crear órganos paritarios en los consejos; también por mayoría se decidió no pedir la renuncia del rector general de la UNAM. Hubo avances en tres ejes: la inseguridad, democratización y respeto a las mujeres. En el primero hubo firmeza en exigir el castigo a la agresión de los porros; en la violencia de género se planteó diseñar protocolos de cuidado y protección eficientes, y repudiar el acoso sexual, y en la democratización se demandó participación de alumnos, profesores y trabajadores. Hay una lista enorme de atropellos de los porros que inicia en la cuarta década del siglo pasado; se exige abrir canales de participación mayor de la comunidad en la elección de directivos para que no sean impuestos desde arriba y menos desde fuera. Se planean asambleas y diálogos con autoridades. Al ir decidiendo retornar a clases, se recalcó que no se trataba de “volver a la normalidad”, porque lo que había antes, no era lo deseable. Se querían cambios de fondo. Se acordaron acciones como marchas y paros el 19 de septiembre en solidaridad con los damnificados de los sismos de 2017, integrarse a las movilizaciones por el cuarto aniversario del crimen contra los normalistas de Ayotzinapa, participar en actos por el día de despenalización del aborto e impulsar una gran marcha en el 50 aniversario del 2 de octubre. Se organizó un acto político cultural por los 50 años de que el ejército irrumpió en las instalaciones de la UNAM, y se enfatizó que se trataba del mismo ejército que en esos momentos era responsable de muchas violencias. La Cámara de Diputados decidió inscribir con letras de oro en su muro de honor el movimiento estudiantil del 68, pero se destacó que la comisión de la verdad había quedado en el olvido, y persistía la deuda del Estado mexicano con el movimiento estudiantil porque seguían en la impunidad los responsables del encarcelamiento, tortura y muerte de estudiantes. Frente a este hecho y un monumento, los agraviados replicaron que, ante el genocidio cometido por Díaz Ordaz, Echeverría y altos mandos del ejército, no querían disculpas, dinero, ni monumentos, sino justicia. Se ha señalado por muchos analistas que el movimiento del 68 ha impulsado libertades democráticas.

Mientras había escuelas que proseguían en paro, otras realizaban encuentros de reflexión. Las autoridades anunciaron la expulsión de 26 que habían participado en el ataque a estudiantes, y algunos de los ejecutores de la golpiza eran apresados. También se anunciaron algunas destituciones de funcionarios. Pero se llamaba la atención de que el conflicto estudiantil no tenía que ver sólo con los porros, sino que era un movimiento más amplio contra la violencia, la precariedad y falta de alternativas de los jóvenes, con la democratización de la misma universidad, contra la mercantilización de la educación; contra la barbarie y por la inteligencia. Finalmente, a finales de septiembre, en una asamblea interuniversitaria menos concurrida que las anteriores, se acordó la redacción de un pliego petitorio dirigido a los tres poderes de la República y a las autoridades de todas las universidades y entidades de educación superior en el que se mantuvieron las demandas ya planteadas y se avanzó en propuestas concretas. Fue denunciado el ambiente de profunda violencia social provocado por las políticas neoliberales. Se enfatizó la oposición a la privatización de la educación pública, y se exigió la abrogación inmediata de la reforma educativa del gobierno de Peña. Una propuesta central tenía que ver con eliminar las estructuras autoritarias de gobierno en las universidades, y la inclusión de la comunidad estudiantil en el diseño e implementación de planes y programas de estudio. Se decidió impulsar una organización estudiantil a nivel nacional que se propusiera reconstruir la sociedad mexicana mutilada y que defendiera el derecho humano a la educación. Otras precisiones fueron el rediseño de estrategias de seguridad, la creación de una comisión independiente para la desarticulación de los grupos porriles, y la formación de una organización independiente para erradicar la violencia de género. Ante esta violencia, los asesinatos, los feminicidios y la desaparición de miembros de las instituciones de educación superior se demandó verdad y justicia. Este movimiento ha mostrado que el nivel superior de educación pública se confirma como instancia crítica de la sociedad.

Las comparaciones siempre son aleccionadoras. Si en el 68 el rector de la UNAM apoyó el movimiento estudiantil y reprobó las respuestas represivas, en la Universidad de Guadalajara tanto el aparato de dirección como su grupo de organización estudiantil represor se pusieron del lado del gobierno y en contra del movimiento estudiantil, al cual no sólo amenazaron, sino lo agredieron. No obstante, eso sucedía en el arriba, mientras el abajo gestaba otras respuestas. Mientras el 2 de octubre en Guadalajara se realizaba una de las marchas conmemorativas, y en el Ex Convento del Carmen se inauguraba la exposición conmemorativa de los 50 años del movimiento del 68 con un centenar de carteles producidos con una creación artística interpelante, en el Museo Regional de Guadalajara se examinaba lo que fue el movimiento popular del 68 en tierras tapatías; se analizó el proceso de lucha contra el autoritarismo en la universidad estatal y cómo se gestó una participación estudiantil ante la cual el arriba desató la represión y una guerra sucia que orilló a esta expresión juvenil a la fundación de la guerrilla urbana que fue duramente reprimida por la estrategia de contrainsurgencia. También se recordó que surgió otro movimiento similar al de la capital de solidaridad de familiares presos, desaparecidos, exiliados y perseguidos políticos. Posteriormente la respuesta juvenil se ha venido expresando de diversas formas, pero en el ámbito de la universidad pública hubo una domesticación. 50 años después, se ha ido despertando un importante contingente estudiantil que ha denunciado el clima de violencia general y de la violencia interna de género y de acoso laboral, y fue organizada una marcha el 7 de septiembre para repudiar los ataques porriles en la UNAM. Hubo estudiantes jaliscienses que asumieron un pronunciamiento de la Asamblea Estudiantil Interuniversitaria.

Apoyaron el movimiento estudiantil emergente en la ciudad de México y denunciaron que en Guadalajara el porrismo se encontraba institucionalizado en la federación estudiantil oficial que trataba de evitar que se desarrollara un movimiento estudiantil independiente y avalaba el avance en la privatización de la educación universitaria. Esa marcha se pronunció en contra de la militarización del gobierno ante la desatada violencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

Se han hecho muchas evaluaciones de lo sucedido hace cincuenta años y el terrible hoy en el que vivimos en México. Se ha enfatizado que siguen pendientes varias deudas: “con la igualdad, con la justicia y con un Estado democrático que repare los daños de la violencia y la impunidad”.<sup>3</sup> Se ha advertido que, a cincuenta años, el no olvido ha sido insuficiente para alcanzar la justicia.<sup>4</sup> Otro elemento nada desdeñable ha sido que, aunque cumplieran órdenes dadas por civiles, han sido las fuerzas armadas las que han reprimido sangrientamente movimientos populares. Pese a que el presidente electo quisiera hacer un borrón con las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en una convocatoria a perdonar a cambio de la promesa de no volver a utilizar al ejército para reprimir al pueblo, persiste la controvertida ley de Seguridad Interior, y muchas de las atrocidades cometidas han provenido del uso de esas fuerzas en tareas de seguridad pública. Las promesas no bastan, y distan mucho de estar en sintonía con la exigencia ante el 68 de enlazar verdad con justicia.<sup>5</sup>

Junto a un pujante movimiento frente al flagelo de la guerra contra los de abajo, la cual ha implicado un aterrador saldo de desaparecidos, parece irrumpir un nuevo movimiento estudiantil que se ha levantado ante el terror y la violencia generalizada. En la hermandad del 68 con Ayotzinapa, mientras el primero ha exigido durante medio siglo verdad y justicia, el de Ayotzinapa tiene cuatro intensos años en que ha demandado lo mismo. Ojalá ambos consigan sus metas organizados desde abajo para que un arriba político de reciente llegada tenga la sensibilidad y voluntad para responder consecuentemente, y que esa esperanza que ha vencido tantos miedos no sea de nuevo aplazada. Por lo pronto, se renueva la indignación; pero la digna rabia no podrá fructificar, sin la organización de los de abajo. ¡Ni perdón, ni olvido; justicia!

---

<sup>3</sup> Alberto Aziz, “A 50 años del 68”, *El Universal*, <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/alberto-aziz-nassif/nacion/50-anos-del-68>

<sup>4</sup> Magdalena Gómez, “Aniversarios, impunidades y apertura a la esperanza”, <http://www.jornada.unam.mx/2018/10/02/022a2pol>

<sup>5</sup> Luis Hernández Navarro, “AMLO, el Ejército y el 68”, <http://www.jornada.com.mx/2018/10/02/opinion/023a1pol>